

**Marco Romero,**Integrante Centro de Pensamiento
y Seguimiento al Diálogo de Paz
Universidad Nacional de Colombia

A un año de instalada la mesa de diálogo entre el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc, en La Habana (Cuba), el proceso de paz está sometido a un implacable escrutinio, animado por la proximidad de las elecciones del 2014.

En ese contexto, se corre el riesgo de confundir la evaluación de los resultados con las urgencias electorales de partidarios y opositores. Por esto, es importante hacer un balance que no desconozca los avances y las posibilidades para llegar a una paz definitiva.

El primer resultado del proceso es la instalación misma de la Mesa, después de ocho años de una política obsesionada con la derrota militar de las guerrillas. El proceso ha logrado desafiar al llamado "estado de opinión", adverso a las opciones de solución negociada, y ha planteado la necesidad de reconocer el conflicto armado interno y reencauzar el país.

La metodología de aproximación, basada en la confidencialidad, permitió desarrollar un primer paquete de acuerdos, a saber: una agenda común, un modelo de diálogo en el exterior y de acompañamiento internacional y un principio de negociación en medio del conflicto.

Luego, las partes conformaron sus delegaciones y buscaron el más amplio respaldo en cada uno de sus ámbitos de influencia. También crearon espacios de participación de la sociedad, a nivel de los foros nacionales, encargados a la Universidad Nacional de Colombia y las Naciones Unidas, y a través de otros mecanismos, como las mesas regionales o los medios electrónicos.

Clamar la apuesta por una solución política ha despertado el respaldo mayoritario de la sociedad y de la comunidad internacional. El proceso genera una gran simpatía entre gobiernos, organizaciones sociales y organismos multilaterales internacionales. Es evidente el apoyo de la Unión Europea, la ONU y la OEA, etc., de igual forma se destaca el respaldo de los Estados Unidos y de países latinoamericanos, muchos de ellos conformados por coaliciones y partidos de izquierda, exitosos en el contexto de la apertura democrática.

Dentro del país, el proceso cuenta con la venia de una especie de coalición social y política heterogénea, que se ha manifestado tanto en la marcha por la paz del 9 de abril como en los diferentes foros y espacios de participación.

Allí han concurrido los partidos de la Unidad Nacional, la mayor parte del sector empresarial, los partidos y movimientos de izquierda y los movimientos sociales en general. Este respaldo cerrado al diálogo de paz se da pese a las profundas diferencias que tienen los sectores populares con el Gobierno en temas relacionados con el modelo económico.

Las encuestas de opinión también dejan ver un respaldo mayoritario, mezclado con una dosis no despreciable de escepticismo y desconfianza.

Momento para ampliar el consenso por la paz

Sin duda, la paz tiene un claro contenido político, pero el proceso debe sobreponerse a los desafíos que plantea la coyuntura electoral. Por eso, carecen de sentido las propuestas de suspensión o cierre del diálogo y solo queda una alternativa si se quieren dejar atrás cincuenta años de guerra: asegurar un mandato mayoritario de paz.



Foto: Andrés Felipe Castaño/Unimedios

El desafío inmediato será la elección de un Congreso de la República sensible a La Paz y a los derechos de las víctimas.

Como era previsible, la única fuente de oposición abierta es la del expresidente Álvaro Uribe, quien apuesta su suerte política a la hipótesis de la derrota militar de las guerrillas y a captar electoralmente un eventual desenlace negativo, tal como ocurrió en el 2002.

Esto se combina con el temor de latifundistas y sectores de la política tradicional a perder sus actuales privilegios en el escenario de un diálogo de paz exitoso, que desencadene reformas rurales orientadas a democratizar y modernizar la estructura agraria.

Otro ámbito importante tiene que ver con los contenidos y la gestión exitosa de la agenda pactada, la actual es mucho más acotada y realista que las de Tlaxcala o San Vicente del Caguán. Las Farc reconocen, por primera vez, que la finalidad del diálogo es la terminación definitiva del conflicto y el Gobierno acepta discutir con la insurgencia la política de desarrollo agrario integral.

Además, se incluyen los temas de participación política, política antidrogas y derechos de las víctimas. Finalmente, se acuerda la refrendación popular de los acuerdos, con lo cual se desvanece el argumento de la oposición que afirma que en La Habana se está negociando todo a espaldas de la sociedad.

Retos por superar

El proceso registra importantes problemas y controversias. Uno de ellos es la continuidad de las hostilidades y las consecuencias humanitarias que ello implica. El Gobierno descarta fórmulas de cese del fuego, porque no quiere renunciar a la presión militar sobre la insurgencia, argumentando que ello le traería ventajas estratégicas.

Por su parte, la insurgencia ha planteado el cese bilateral e incluso ha decidido periodos de tregua unilateral. La sociedad civil ha señalado la necesidad de buscar fórmulas humanitarias y frenar los altos índices de desplazamiento forzado en regiones como el corredor pacífico.

Otra fuente de polémica es el debate sobre los límites de la agenda pactada. Mientras la insurgencia plantea reabrir temas como el cese del fuego e incluir la minería dentro del enfoque territorial, el Gobierno mantiene una postura de no negociación del modelo económico y político, cuando la agenda incluye el desarrollo agrario y la participación política.

Un punto de desacuerdo adicional son las actuaciones que se consideran unilaterales en temas de la agenda que aún no han sido examinados. La insurgencia ha

mostrado reservas sobre las iniciativas gubernamentales del Marco Jurídico para la Paz y el Referendo Constitucional.

Igualmente, genera polémica el tema que tiene que ver con el ritmo de las negociaciones y su desencuentro con los tiempos del proceso político y electoral del 2014. El Gobierno critica a la guerrilla por no avanzar en acuerdos en el corto plazo y la insurgencia considera que ese afán se explica por la necesidad de apalancar la reelección.

De otro lado, mientras el Gobierno apuesta a la reelección presidencial, la oposición uribista buscará un cambio de 180 grados en la política de paz. Las fuerzas políticas que respaldan la continuidad del proceso, pero que no apoyan la reelección, están dedicadas a crear tercerías que impidan la concentración de la representación política entre santistas y uribistas.

En la coyuntura, el asunto radica en que las elecciones tienden a convertirse en una especie de plebiscito prematuro sobre el proceso de paz y sus resultados pueden afectar la voluntad política en que se sustenta. El Congreso elegido en el 2014 será el cuerpo que decida sobre la convocatoria del Referendo Constitucional o la Asamblea Constituyente y sobre el marco de derechos de las víctimas, entre otros temas.